Frente a los atentados en Cali y Antioquia, el Gobierno nacional debe actuar con contundencia para garantizar la seguridad

Bogotá D.C., 21 de agosto de 2025. Desde el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga condenamos con firmeza los atentados ocurridos en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali y contra unidades de la Fuerza Pública en Amalfi, Antioquia. Estos hechos no son aislados: reflejan una preocupante escalada de violencia que pone en riesgo la seguridad nacional y evidencia el debilitamiento progresivo del control estatal en amplias zonas del país. Expresamos nuestra solidaridad con las víctimas, sus familias, los integrantes de la Fuerza Pública y las comunidades afectadas.

No podemos permitirnos la ingenuidad ni la indiferencia. La expansión del crimen organizado y su consolidación en territorios donde el Estado ha perdido presencia, deben ser enfrentadas con decisión. Como sociedad, debemos alzar la voz y exigir al Gobierno nacional que recupere el control del territorio y actúe con la urgencia que exige este momento crítico.

La violencia urbana, en particular, evidencia cómo estas redes criminales, financiadas por economías ilícitas, han consolidado su control en distintos territorios, afectando la vida cotidiana de los ciudadanos y desafiando la capacidad del Estado para garantizar su seguridad.

La política de seguridad debe reorientarse para enfrentar los nudos estructurales que perpetúan la inseguridad: la falta de efectividad del sistema judicial, el déficit de capacidades de la Fuerza Pública, la pérdida del control territorial y el deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones.

Es por ello, que no hay más tiempo para seguir insistiendo en una política de Paz Total que creó incentivos que han permitido la expansión de los grupos criminales y aumentado los riesgos para la población civil y la Fuerza Pública.

Hacemos un llamado al Gobierno nacional para que asuma plenamente su responsabilidad de garantizar la seguridad y para que actúe de forma inmediata, devolviendo al país la tranquilidad y el imperio de la ley.

El Gobierno debe recomponer capacidades, especialmente en inteligencia, y definir una estrategia integral para enfrentar al crimen organizado. Esta debe incluir cooperación internacional, el debilitamiento de las finanzas ilícitas y el desmantelamiento de su logística operativa. Asimismo, es urgente que se respalde a gobernadores y alcaldes con recursos suficientes para garantizar la seguridad en las ciudades y que los ciudadanos vivan libres de miedo.

Más información: *Katherinn Cuervo, directora de comunicaciones estratégicas del ICP. katherinn.cuervo@icpcolombia.org celular: 3194588129*